

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/35395
184/35397 a 184/35400

25/02/2026

102539
102541 a 102544

AUTOR/A: ALÓS LÓPEZ, Ana Isabel (GP); ARGÜELLES GARCÍA, Silverio (GP); BELDA PÉREZ-PEDRERO, Enrique (GP); CLEMENTE MUÑOZ, Raquel (GP); CUESTA RODRÍGUEZ, María (GP); FÚNEZ DE GREGORIO, Carmen (GP); JIMÉNEZ LINUESA, Beatriz (GP); MADRID OLMO, Bartolomé (GP); MARTÍN GARCÍA, Pedro Samuel (GP); MARTÍNEZ GÓMEZ, Antonio (GP); MONEO DÍEZ, María Sandra (GP); PARRA GALLEGO, Agustín (GP); RODRÍGUEZ CALLEJA, Patricia (GP); TOMÁS OLIVARES, Violante (GP); VÁZQUEZ JIMÉNEZ, María del Mar (GP)

RESPUESTA:

En relación con las preguntas de referencia, se informa de que la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que, entre 2020 y 2025, el indicador AROPE descendió tras el repunte registrado en 2021. Desde ese máximo del 27,8%, la tasa se reduce progresivamente hasta situarse en el 25,7% en 2025, consolidando una mejora acumulada en el tramo final del periodo. En el último año analizado, de 2024 a 2025, la tasa AROPE desciende del 25,8% al 25,7%, lo que supone una reducción interanual de 0,1 puntos porcentuales.

Riesgo de pobreza o exclusión social						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE)	27,0	27,8	26,0	26,5	25,8	25,7
En riesgo de pobreza (renta año anterior a la entrevista)	21,0	21,7	20,4	20,2	19,7	19,5
Con carencia material y social severa	8,5	8,3	7,7	9,0	8,3	8,1
Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 64 años)	10,0	11,6	8,7	8,4	8,0	8,0



La mejora se apoya, principalmente, en la evolución del riesgo de pobreza por renta, que baja del 19,7% al 19,5% (-0,2 puntos) continuando la senda descendente de los últimos años. Asimismo, la carencia material y social severa se reduce del 8,3% al 8,1% (-0,2 puntos), lo que indica una ligera mejoría de las condiciones materiales en los hogares. Por su parte, la proporción de personas en hogares con baja intensidad en el empleo se mantiene estable en el 8,0%, y consolida el descenso de la tasa desde 2021.

Entre 2020 y 2025, la tasa de pobreza extrema, ingresos inferiores al 40% de la mediana, muestra una evolución positiva en términos generales. Tras aumentar en 2021 hasta el 10,2%, el indicador desciende de forma progresiva hasta situarse en el 8,0% en 2025, lo que supone una reducción acumulada de 2,2 puntos respecto al máximo de 2021. En el último año, de 2024 a 2025, la tasa total baja del 8,4% al 8,0%, registrando una reducción interanual de 0,4 puntos porcentuales.

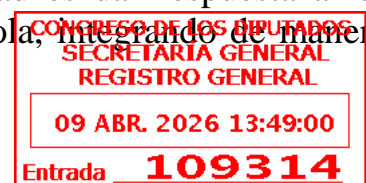
Tasa de pobreza extrema						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total	9,5	10,2	8,9	8,3	8,4	8,0
Menores de 16 años	14,2	15,1	13,6	13,7	14,3	12,8
65 y más años	5,0	5,9	5,8	5,6	5,6	5,5

Por grupos de edad, los menores de 16 años presentan sistemáticamente las tasas más elevadas de pobreza extrema. Tras el máximo de 15,1% en 2021, la pobreza extrema infantil desciende hasta el 12,8% en 2025, con una mejora interanual destacada de 1,5 puntos respecto a 2024 (14,3%). A pesar de esta reducción, sigue siendo el colectivo más vulnerable.

En cambio, la población de 65 y más años mantiene niveles significativamente inferiores y más estables. Tras el repunte de 2021, 5,9%, la tasa se modera gradualmente hasta el 5,5% en 2025, con una ligera reducción de 0,1 puntos en el último año.

Con carácter general, el Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre de 2024 una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social para el periodo 2024-2030, a propuesta conjunta de los Ministerios de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y de Juventud e Infancia, con el objetivo principal de mantener y desarrollar el Estado de Bienestar en toda España, mediante un sistema de protección social reforzado y sostenible al alcance de toda la población, con especial atención a las personas en situación de pobreza o exclusión social.

La Estrategia constituye la hoja de ruta de la política social del Gobierno hasta 2030, plenamente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Su finalidad es dar respuesta a los principales retos estructurales que afronta la sociedad española, mejorando de manera





coherente y transversal el conjunto de medidas dirigidas a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas, niños, niñas y adolescentes; jóvenes; personas sin hogar; población gitana; personas con discapacidad; y personas con problemas de salud mental, garantizando su aplicación efectiva en todas las comunidades y ciudades autónomas bajo un enfoque de cohesión social y territorial.

La Estrategia conforma el marco de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social impulsadas desde la Administración del Estado y define 4 grandes retos estratégicos, 12 objetivos y 54 líneas de actuación, que se van a concretar en medidas específicas recogidas en los planes operativos anuales de ejecución y seguimiento. Dichos retos se concretan en:

1. Reto 1. Garantizar recursos para la ciudadanía, mediante políticas que aseguren unos ingresos mínimos a través de las rentas del trabajo y prestaciones sociales, para el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad, ayudando a personas vulnerables a pagar el alquiler, previniendo los desahucios, ampliando herramientas contra la pobreza energética y abordando medidas para erradicar el sinhogarismo.

Cabe destacar el Plan Estatal de vivienda 2026-2030 que permitirá dar un paso decisivo en la construcción de un sistema público de vivienda que consolide la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar, cuyos objetivos primordiales son:

- Incrementar el parque de vivienda asequible, que estará protegido de forma permanente.
- Rehabilitar el parque existente para dignificar las viviendas y mejorar su eficiencia y accesibilidad, así como para promover barrios más habitables.
- Reducir la edad de emancipación joven.
- Rebajar el esfuerzo financiero para acceder a la vivienda.
- Revertir las zonas de mercado tensionado

Además, se revisará el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para aumentar las cantidades de las prestaciones y ayudas sociales, así como el número de personas beneficiarias.

2. Reto 2. Inversión social en las personas, con el fin de transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En materia de educación, se fija como meta crear nuevas plazas en educación infantil, asegurar la gratuidad en el primer ciclo para las



familias, prevenir y reducir el abandono escolar para que los niños disfruten de las mismas oportunidades que los demás. El impulso a la escolarización de 0 a 3 años es una de las principales inversiones educativas que contribuye a una educación equitativa y de calidad.

3. Reto 3. Refuerzo del estado de bienestar y la protección social. Se construye una red de protección para garantizar los derechos sociales y facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, especialmente a las mujeres, que sufren una mayor precariedad y que, generalmente, siguen siendo quienes más tiempo dedican al cuidado de niños, adolescentes y personas en situación de dependencia. Para ello, se impulsan acciones en favor de las familias vulnerables, con apoyo especial a aquellas en las que haya personas con discapacidad. Asimismo, se promueve el acceso a comedores escolares saludables, a la atención infantil temprana, y a los sistemas de dependencia. También el acceso al Sistema Nacional de Salud y a la atención de la salud mental.
4. Reto 4. Desarrollo de alianzas y trabajo en red. Se mejora la gestión y la coordinación de las políticas para alcanzar el mayor nivel de eficiencia, eficacia y cobertura. Se promueve también la cooperación territorial a todos los niveles y se fomenta la participación de todos los actores en el diseño y evaluación de los programas y de las diferentes iniciativas.

El Gobierno está trabajando para responder a los desafíos estructurales de la pobreza y la exclusión social enmarcándose en sus compromisos europeos e internacionales. La Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030 se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas —en particular, el ODS 1 (Fin de la Pobreza) y el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades)—, así como con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado en 2017 y desarrollado a través de su Plan de Acción aprobado en 2021.

El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales establece veinte principios fundamentales que deben guiar las políticas sociales de los Estados miembros. Entre ellos, destacan el derecho a una vivienda adecuada, a la inclusión activa, a la protección social y a la igualdad de oportunidades. Para hacer realidad estos principios, el Plan de Acción fija tres metas sociales clave para 2030: alcanzar una tasa de empleo del 78 % entre la población de 20 a 64 años, garantizar que al menos el 60 % de los adultos participe anualmente en actividades de formación, y reducir en al menos 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea, de las cuales al menos cinco millones deben ser menores de edad.

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) es el principal instrumento comunitario de financiación para reformas en empleo, educación, inclusión y protección social. En el



período 2021-2027, España cuenta con una asignación de 11.300 millones de euros, destinándose al menos el 25 % a inclusión social y lucha contra la pobreza y un 5 % a la Garantía Infantil Europea.

La Garantía Infantil Europea, adoptada por el Consejo en 2021, constituye un compromiso político y técnico de primer orden para garantizar que todos los niños y niñas en situación de vulnerabilidad tengan acceso efectivo y gratuito a servicios esenciales como la educación infantil, la atención sanitaria, una alimentación saludable, una vivienda adecuada y actividades de ocio. España ha desarrollado su propio Plan Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil, en coherencia con esta Recomendación. La Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030 refuerza este compromiso como parte de su enfoque preventivo para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.

Además del FSE+, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) complementa estas actuaciones financiando infraestructuras sociales, vivienda asequible, regeneración urbana y proyectos de economía social, especialmente en las regiones más desfavorecidas.

La Estrategia se sustenta en políticas ya en marcha, que están siendo coordinadas y reorientadas con el fin de maximizar su impacto inclusivo, manteniendo su alineación con un enfoque basado en la innovación, la prevención y la equidad:

- En Vivienda, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 prioriza el acceso a vivienda digna y asequible, mejorar su habitabilidad y accesibilidad mediante la rehabilitación (clave para zonas o barrios periféricos y/o desfavorecidos), reducir la edad de emancipación joven, rebajar el esfuerzo financiero para acceder a la vivienda (que hoy supone una de las principales causas de exclusión) y revertir las zonas de mercado tensionado.
- En Educación, el Programa PROA+ está reforzando el acompañamiento educativo en centros con alumnado en situación de vulnerabilidad, para mejorar la equidad educativa y reducir el abandono escolar temprano. Además, desde el ámbito de la Formación Profesional se están creando oportunidades para favorecer el acceso al empleo por parte de todas las personas, incluyendo aquellas en situación de vulnerabilidad. De hecho, son una clave de algunos itinerarios de inclusión.
- En Inclusión, además del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se han impulsado a través del PRTR proyectos piloto de inclusión activa que combinan apoyo económico (prestaciones) con orientación, formación y acompañamiento, para que las personas puedan salir del círculo de dependencia y acceder a oportunidades reales.



- En Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Plan País 30 Minutos busca garantizar el acceso a servicios esenciales en menos de media hora en zonas rurales, y se están desplegando medidas contra la pobreza energética para proteger a los hogares más vulnerables.
- En Ciencia, Innovación y Universidades, existen oportunidades de I+D que podrían aprovecharse para financiar la innovación social, como el programa Misiones Ciencia e Innovación.
- En Trabajo y Economía Social, el Plan de Empleabilidad del Pueblo Gitano 2025–2028 incluye itinerarios personalizados, formación con compromiso de contratación y medidas específicas para mujeres y jóvenes gitanos. Además, se están desarrollando programas de empleo inclusivo para grupos con baja empleabilidad, como personas con discapacidad, migrantes o parados de larga duración, en colaboración con el SEPE y entidades del tercer sector.
- En Sanidad, se promueven estrategias de prevención desde atención primaria, el abordaje de los determinantes sociales de la salud y el desarrollo de activos comunitarios como parte de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional Salud.

El texto de la Estrategia puede consultarse en el siguiente enlace:

<https://www.dsca.gob.es/es/derechos-sociales/inclusion/inclusion-social-espana>

En coherencia también con la Estrategia 2024-2030, el Gobierno de España está trabajando en la mejora y refuerzo de las prestaciones y apoyos vinculados a la prevención y reducción de la pobreza y la exclusión social, así como en el impulso de medidas específicas de apoyo a familias con menores y de fomento del empleo, con medidas específicas que ya se incrementaron en 2025 y que se espera que mejoren en 2026.

Entre las principales políticas implementadas destaca el IMV, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social y garantiza un nivel mínimo de renta a las personas en situación de vulnerabilidad económica. Esta prestación ha alcanzado dos objetivos fundamentales: por un lado, la redistribución de la renta, con el propósito de erradicar la pobreza extrema; y por otro, promover la inclusión social y la inserción al mercado laboral, mediante incentivos al empleo y a la inclusión.

Desde su puesta en funcionamiento en junio de 2020, la prestación del Ingreso Mínimo Vital ha evolucionado en su desarrollo normativo y operativo para profundizar en la consecución de sus objetivos. En primer lugar, con la publicación de la Ley



19/2021, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital se concedieron nuevos complementos para proteger a aquellas personas o unidades de convivencia donde se integran perfiles de mayor vulnerabilidad:

- Complemento de ayuda para la infancia (CAPI): complemento en la cuantía de la prestación reconocida a las unidades de convivencia con menores. Se trata de una prestación económica vinculada al IMV cuyo objetivo es reforzar la protección social de los hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad económica y reducir la pobreza infantil. Está dirigida a hogares beneficiarios del IMV con menores a cargo. Su importe es variable y depende de la edad de los menores. El CAPI para 2026 tiene cuantías entre 57,50 euros y 115 euros al mes por menor, según la edad. Se concede por cada niño, niña o adolescente que forme parte de la unidad de convivencia. Busca garantizar ingresos adicionales para cubrir necesidades básicas y evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza.
- Complemento por discapacidad: complemento equivalente a un 22 % de la cuantía para las personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.
- Complemento por monoparentalidad: complemento del 22 % de la cuantía mensual de la renta garantizada para las unidades de convivencia monoparentales.

Con el objetivo de eliminar los desincentivos al empleo y favorecer la inclusión laboral, el 1 de enero de 2023 entró en vigor el Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del IMV con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia. De esta forma, antes de la entrada en vigor del incentivo, si un hogar aumentaba sus rentas del trabajo, la cuantía de IMV se reducía en el importe del incremento. El incentivo al empleo hace que un determinado porcentaje de ese incremento se excluya del cómputo de rentas. Por otro lado, para garantizar la mayor accesibilidad posible en la prestación del IMV y superar las dificultades derivadas de la falta de información tanto para los potenciales hogares beneficiarios como para las personas que les prestan apoyo en el proceso de solicitud, desde diciembre de 2021 se encuentra en funcionamiento el Registro de Mediadores Sociales del IMV. A través de este registro, se permite que trabajadores sociales de entidades del Tercer Sector de Acción Social puedan acreditar algunas de las condiciones necesarias para poder recibir el IMV. Estas entidades desempeñan una función clave en la emisión de certificados dentro del procedimiento, contribuyendo así a ampliar las posibilidades de acceso a la prestación, especialmente entre los colectivos más vulnerables.



Con todo ello, según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en enero de 2026¹, el IMV ha protegido, desde su puesta en marcha en junio de 2020, a un total acumulado de 1.158.563 hogares. En términos interanuales, durante el mes de enero se registraron 126.463 prestaciones activas más que en el mismo mes que el año anterior, lo que supone un incremento del 18,82 %. Asimismo, el número de personas beneficiarias también ha aumentado: en los hogares perceptores conviven 391.133 beneficiarios más que en enero de 2025, lo que equivale a un crecimiento del 19,1 % respecto al año previo.

También, destacar el Salario Mínimo Interprofesional. El Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, ha fijado recientemente el salario mínimo interprofesional para 2026 en 40,70 euros/día o 1.221 euros/mes, en 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Otras medidas llevadas a cabo en España y destinadas específicamente a la pobreza infantil o con impacto en la misma, cuya competencia corresponde al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (MDSCA) son:

- Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que cuenta con una financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por importe de 198,7 millones de euros en 2024. En esta financiación se incluye la garantía de mantener la red de los servicios sociales de atención primaria, a la vez que financia el Programa de protección a la familia y lucha contra la pobreza infantil, el Programa VECA, que tiene por objeto garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares /o no lectivos y la conciliación de la vida familiar y laboral y el Programa para el refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, en ejecución de lo previsto en la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPVI), por un importe de 25 millones de euros.
- Convocatoria del MDSCA para proyectos de Innovación Social, publicada el 17 de julio de 2024, dotada con 65,5 millones de euros, provenientes del FSE+ para la financiación de proyectos con los que proteger a la infancia y adolescencia en riesgo o desamparo y que deberán contribuir a la implementación de la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, aprobada en junio de 2024.
- Programa FSE+ de Asistencia Material Básica 2021-2027 (Programa BÁSICO) para España, con un importe acumulado de 565 millones de euros,

¹ [INSS. IMV – Principales datos](#)



que tiene como fin proporcionar alimentos o asistencia material básica a las familias con menores a cargo vulnerables, que se acompaña de medidas de inclusión social para erradicar la pobreza, y que en 2025 es gestionado por las comunidades autónomas.

También, es imprescindible nombrar las siguientes medidas, competencia del Ministerio de Juventud e Infancia, coproponente de la Estrategia de Pobreza mencionada:

- Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea 2022-2030: plan que recoge la perspectiva de los derechos de la infancia de los principales tratados, normativas y acuerdos internacionales y es el marco de referencia nacional y europeo para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de la juventud e infancia.

El Primer Informe bienal fue publicado el pasado mes de diciembre de 2024, y analiza los avances e iniciativas de lucha contra la pobreza infantil llevadas a cabo en España por la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía (CCAA).

- Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia 2023-2030: es un plan hacia el futuro que articula la acción del conjunto de España y de las Administraciones, con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en torno a ocho áreas estratégicas y una serie de metas a alcanzar en 2030. Más información:

https://www.juventudeinfancia.gob.es/sites/default/files/Estrategia_Estatal_Derechos_InfanciayAdolescencia.pdf

Siguiendo con las medidas para el progreso social y la cobertura a la ciudadanía, el pasado 3 de febrero, el Consejo de ministros ha aprobado un Real decreto-ley 3/2026 de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social, que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026, así como otras medidas relevantes en materia de Seguridad Social. La subida, que ya fue efectiva en enero, supone un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones contributivas.

Las principales medidas aprobadas en el Decreto-ley 3/2026 por el Gobierno son:

1. Revalorización de las pensiones públicas: una de las medidas centrales del Real Decreto-ley es la revalorización de las pensiones públicas para 2026.



Esto incluye ajustes en las cuantías y actualización de bases de cotización del Sistema de la Seguridad Social para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en relación con la inflación.

2. Ajustes en cotizaciones y mecanismos intergeneracionales: se actualiza la base máxima de cotización y se modifica el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) junto con la cuota de solidaridad, con el objetivo de equilibrar sostenibilidad del sistema y aportaciones de las distintas generaciones.
3. Medidas para desempleados: se elimina la obligación de presentar la declaración de la renta (IRPF) para quienes perciben prestaciones por desempleo, lo que beneficia especialmente a personas con rentas bajas y reduce cargas administrativas para este colectivo.
4. Prórroga de medidas en materia de vivienda: el decreto prorroga las medidas de suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, reforzando así el denominado “escudo social” frente a situaciones de vulnerabilidad habitacional. No obstante, se contempla que propietarios con 1 o 2 viviendas (no considerados grandes tenedores) puedan quedar exentos de la suspensión automática del desahucio si el inquilino no acredita vulnerabilidad o si el propietario demuestra su propia necesidad, agilizando así la recuperación de la vivienda en estos casos específicos.
5. Incrementos en asignaciones por hijos a cargo: el decreto incluye también el incremento de las asignaciones económicas por hijo a cargo o con discapacidad reconocida, con subidas interanuales que responden al ajuste de la inflación y renta disponible familiar.
6. Otras medidas técnicas y sociales: el decreto incluye diversos ajustes técnicos en materia de cotizaciones y normativas de Seguridad Social, además de medidas complementarias dirigidas a colectivos específicos dentro del sistema de protección social.

El Decreto-ley 3/2026 febrero 2026 puede consultarse en el siguiente enlace:

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-2548>

Por otro lado, en el marco de las políticas sociales que se impulsan, constituye igualmente una prioridad del Gobierno seguir mejorando el régimen de permisos y prestaciones vinculadas al cuidado de familiares, y promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres, incluyendo medidas relacionadas con la flexibilidad laboral, tal



como se ha venido produciendo a través de diversas iniciativas legislativas en la materia.

Entre ellas cabe destacar el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en el que se abordó la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2019/1158, y, entre otras medidas, se mejoró la duración del permiso por accidente, hospitalización o enfermedad de familiar; además, el Gobierno está trabajando en la Ley de Familias, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en fase prorrogada de enmiendas, y que refuerza los derechos de las familias en materia de atención a la primera infancia a través, fundamentalmente, de tres medidas:

1. La configuración de la atención temprana como derecho subjetivo
2. La aplicación de este mismo trato al primer ciclo de educación infantil.
3. La implementación del enfoque de los 1.000 primeros días para reforzar la atención que se presta a la primera infancia desde una perspectiva integrada.

La norma reconoce el derecho a la conciliación corresponsable y obliga a las administraciones públicas a promoverla, fomentando además un entorno laboral favorable. Su desarrollo se concretará mediante normativa sectorial y posibles mejoras durante la tramitación parlamentaria, siendo clave ampliar la oferta de servicios de cuidado y educación infantil accesibles, asequibles y de calidad.

Finalmente, es importante mencionar que el MDSA junto con el Gobierno, está evaluando mecanismos como la prestación universal por hijo, que podría consistir en una asignación de 200 euros mensuales por hijo a cargo hasta los 18 años, sin criterios estrictos de renta, y que complementarían las medidas actuales. Este tipo de ayuda tendría efectos directos sobre la reducción de la pobreza infantil y la mejora de la protección social de las familias con niños.

Por todo lo anterior, se pone de manifiesto que el Gobierno de España destina una parte importante de sus esfuerzos y recursos a enfrentar la pobreza, impulsando políticas públicas, programas de apoyo y medidas normativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Madrid, 09 de abril de 2026